

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, vencido el término de traslado establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la decisión correspondiente en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por JOSÉ IGNACIO PINEDA TABORDA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-007-2021-00004-01).

ANTECEDENTES

El demandante pretende sea reconocido el retroactivo pensional de su pensión de invalidez desde cuando se reportó su última cotización al Sistema en atención a la enfermedad congénita que fue calificada, además de los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas procesales.

El demandante en respaldo a sus aspiraciones narró que el 05 de diciembre de 2018 elevó solicitud ante Colpensiones para la calificación de su pérdida de capacidad laboral, cuya cita de valoración se presentó para el 29 de julio de 2019. Por comunicación del 05 de septiembre de 2019 Colpensiones requirió una valoración actualizada por medicina interna, siendo arribados los documentos el 07 de octubre de 2019; sin embargo, debió promoverse acción

de tutela para lograr la emisión del dictamen dado el 07 de febrero de 2020, asignando una pérdida de capacidad laboral del 52.30% de origen común con fecha de estructuración del 22 de agosto de 1956 que coincide con la fecha de nacimiento por tratarse de una enfermedad congénita. El 20 de mayo de 2020 solicitó ante Colpensiones una pensión de invalidez, reconocida por Resolución SUB 123087 del 08 de junio de 2020 en cuantía de \$877.803, siendo ingresado en nómina de julio, pagadera en el mes siguiente, siendo desconocido el retroactivo pensional. El 17 de diciembre de 2020 efectuó solicitud de nuevo estudio pidiendo el retroactivo debido, lo que fue negado por Resolución SUB 123087 del 08 de junio de 2020.

COLPENSIONES procedió a dar respuesta al libelo, oportunidad en la aceptó la mayoría de los hechos expuestos, pero aduciendo que la negativa del retroactivo pensional no se dio de manera injustificada por ser necesario para ello el certificado de incapacidades con cumplimiento de unas formalidades, a partir de lo que se vela por los recursos públicos. Formuló como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar el retroactivo de la pensión de invalidez, inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, buena fe de Colpensiones, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

En sentencia emitida el 22 de noviembre de 2021, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de \$10.253.524 como retroactivo de las mesadas pensionales entre agosto de 2019 y junio de 2020, frente a la cual dispuso la compensación por la suma de \$3.849.094 reconocida por Resolución SUB 170704 de 2021, autorizando los descuentos por aportes en salud. CONDENÓ a Colpensiones a pagar intereses moratorios por la suma hasta la fecha del pago. CONDENÓ en costas a Colpensiones, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.817.052.

La mandataria judicial de la activa manifestó su disenso en cuanto a los intereses de mora, por considerar que ellos también proceden sobre el retroactivo ya cancelado y que correspondió a las mesadas del 08 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020, en tanto para ese caso también se presentó una mora injustificada.

Colpensiones por su parte, se apartó de lo decidido en tanto aduce que en cumplimiento de un concepto interno se procedió con el reconocimiento del retroactivo pensional a partir de la fecha en que se emitió el dictamen de PCL, data para la que no se observaron pagos simultáneos, a más que el último aporte fue anterior a esa experticia. Indicó no tener cabida los intereses de mora debido a que la entidad acató la Ley y expidió las Resoluciones conforme a derecho, y no por desidia o mala fe se dejó de reconocer el retroactivo pensional, sino que en su momento no fueron satisfechos los requerimientos necesarios en cuanto al certificado de incapacidades con el que se busca evitar realizar doble pago por igual concepto.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Estando por fuera de discusión el reconocimiento de la pensión de invalidez a José Ignacio Pineda Taborda, y el reconocimiento de un retroactivo pensional del 08 de febrero a julio de 2020 en el curso de este proceso (Archivo 17), la Sala plantea como problema jurídico a resolver a partir de los recursos propuestos, si hay lugar a conceder el retroactivo pensional desde el momento en que fue reportada la última cotización al Sistema, definiendo en consecuencia la procedencia de los intereses moratorios.

La Sala también conoce del asunto en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por el grado de consulta en favor de Colpensiones sobre los puntos no recurridos dada la decisión desfavorable a sus intereses.

Pues bien, para definir esta controversia lo primero por decir es que el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 señala que *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de partes interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”*.

No obstante, los eventos en que la pérdida de la capacidad laboral proviene de una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, constituyen una excepción a la regla general y, por lo tanto *“la prudencia obliga a analizar las particularidades de cada caso a efecto de conceder u otorgar oportunamente las prestaciones económicas y de salud necesarias para la recuperación del afiliado y/o su subsistencia”* (CSJ SL472-2020).

Así, la Corte insistentemente ha previsto para estos padecimientos crónicos, congénitos y progresivos que el parámetro para determinar la asunción de los presupuestos legales es distinto (CSJ SL3275-2019, SL4567-2019, SL4178-2020, SL4346-2020, SL1002-2020, SL770-2020; CSJ SL4178-2020, entre otras), donde se señaló que era dable tener en cuenta, no solo la fecha en que se estructuraba la invalidez (regla general), sino también *“(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional, o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando”, estableciendo el precedente que solo se puede tener en cuenta la fecha de la última cotización siempre y cuando sean efectuadas esas cotizaciones antes de la fecha de la notificación del dictamen, porque en ese momento la persona ya se entera de que es inválido y por esa razón no es dable tener en cuenta cotizaciones efectuadas con posterioridad a ese momento* (Ver SL5162-2021).

Por manera que, aunque la discapacidad laboral en las enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, se puede estructurar en determinada fecha, la persona puede mantener una capacidad residual de trabajo que le

permite continuar activa laboralmente, por lo que de la confrontación del estado de salud del afiliado con la vigencia de su contribución al sistema, puede surgir sin ambages que por el hecho de la enfermedad, aquel no vio truncada en forma abrupta la posibilidad de procurarse su digna subsistencia (Ver SL2922-2022).

De ese modo, en la sentencia CSJ SL4178-2020, la Alta Corporación invitó a realizar una labor exhaustiva de verificación de las condiciones que provocaron la invalidez del afiliado con miras a establecer con la mayor exactitud posible la enfermedad que dio lugar a la invalidez, precedente que conserva plena correspondencia con lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-588-2016, la cual señaló las reglas aplicables al reconocimiento de la pensión de invalidez de las personas que padecen de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas que son: i) tener en cuenta factores como “las condiciones específicas del solicitante y de la patología padecida, así como su historia laboral”; (ii) debe “verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez, hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social”, y (iii) debe determinar el momento desde el cual se verificará que la persona cuenta con el número de semanas legalmente requeridas para obtener la pensión, ya sea la fecha de calificación de la invalidez, o la fecha de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo.

Bajo las anteriores previsiones, se acude al material probatorio, encontrando que dentro del expediente administrativo de Colpensiones se cuenta con un aparte del historial clínico de donde se desprende que el demandante cuenta con un diagnóstico de “hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica grado severo” que lo ha acompañado toda su vida.

A partir de tal patología, José Ignacio Pineda fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 52.30% de origen común siendo determinada como fecha de estructuración el 22 de agosto de 1956 (fl.12-14), que coincide con la

de su nacimiento, por tratarse de una enfermedad catalogada como de origen congénito.

Igualmente, se cuenta con el historial laboral de donde se desprenden contribuciones al Sistema de Pensiones hasta el ciclo de julio de 2019 como independiente, calidad a través de la que efectuaba aportes desde el 01 de enero de 1999 a excepción del período comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 2018, que lo hizo por medio de “Temporales Especializados S.A” (Págs. 33-44 Archivo 03 y Archivo 12), pudiendo desprenderse de la experticia de calificación y el historial médico, que el actor se desempeñaba como “campesino” o “agricultor”, actividad productiva de la que se originaron tales aportes, los que cesaron desde el mes de julio de 2019.

A partir de esas probanzas y atendiendo el propósito de la activa que no es otro que lograr el reconocimiento de la pensión de invalidez desde el momento en que se dio la última cotización al Sistema como posibilidad planteada para este tipo de patología congénita, esta Sala de Decisión Laboral considera en virtud al contexto de la enfermedad que dio paso a la invalidez del señor Pineda, que no es el parámetro más acertado para definir el momento real en que su estado de salud le impidió seguir en uso de su capacidad laboral.

Y es que debe decirse que en el asunto, se trata de una persona con una ausencia auditiva bilateral desde su nacimiento, por lo que si bien se está ante una enfermedad del tipo congénito, no es dable pregonar bajo este criterio que fue su patología la que solo le permitió continuar activo laboralmente hasta julio de 2019, y que fue en ese momento que se manifestó la enfermedad en el punto de imponerle cesar de manera definitiva la posibilidad de desempeñarse en el ámbito del trabajo, pues ello no puede pregonarse del limitado historial clínico que obra en la foliatura, de donde no se desprende que se trató de una condición que fue evolucionando de manera paulatina hasta llegar a un punto de una pérdida total de la audición, por lo que no es razonable entender que las cotizaciones al sistema pensional las realizó en ejercicio de una capacidad residual, hasta que el actor perdió toda su capacidad productiva de forma permanente, porque las condiciones médicas se mantuvieron inanes en el tiempo desde su nacimiento.

Es así como, esta colegiatura considera acorde a las circunstancias patológicas que reviste el asunto, que no es viable aseverar que fue el deterioro de la capacidad física del reclamante, el que marcó el cese de las cotizaciones, pues dadas sus condiciones particulares así no fue demostrado; sin embargo, en virtud del precedente jurisprudencial ya reseñado, el momento a partir del cual, puede ser reconocida la pensión de invalidez es en el que se califica dicho estado, encontrando prudente aseverar que siendo que la valoración efectuada el 29 de julio de 2019 dio lugar a la PCL superior al 50% que otorga la condición de inválido en el actor conforme lo pregonan el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, es la data razonable de donde puede derivarse el punto de partida para el estudio de la prestación y sus requisitos de ley, así como el disfrute de la prestación, conclusión que se aviene con la posición reiterada de la Alta Corporación que busca la protección a las personas que, como el accionante, son sujetas de una protección especial del Estado por su condición de vulnerabilidad.

Es importante precisar, que es la data de la valoración la tenida en cuenta y no la de la fecha del dictamen como fue definido por la entidad administradora al reconocer la prestación, en tanto la tardanza para emitir el peritaje laboral que se constituye en un lapso de seis meses desde la valoración física, es atribuible de manera exclusiva a la calificadora delegada por la enjuiciada, sin que sea posible endilgar las consecuencias que ello acarrea sobre la prestación económica al afiliado, a más de no verificarse para ese momento que se reconociera subsidio por incapacidad fruto de la imposibilidad de recibir su salario por presentar incapacidad laboral por enfermedad (Págs. 31-32 Archivo 03), que se exhibe como una prohibición de cara al reconocimiento inicial de la prestación por invalidez.

Conforme a ello, aunque bajo argumentos disímiles en el plano de las condiciones específicas del solicitante, es viable el retroactivo pedido, el que se calculará como bien procedió la *a quo* a partir del 01 de agosto de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020, arrojando la suma de \$10.235.514 como se detalla a continuación, que debe ser modificada en beneficio de Colpensiones de cara a los \$10.253.514 encontrados en primera instancia, sin perjuicio de la compensación ordenada por el reconocimiento dispuesto a través de la

Resolución SUB170704 del 26 de julio de 2021 (Archivo 17) por la suma de \$3.849.094, y de los descuentos ordenados por descuentos en salud.

AÑO	VR. MESADA	Nº MES	TOTAL
2019	\$ 828.116	6	\$ 4.968.696
2020	\$ 877.803	6	\$ 5.266.818
		TOTAL	\$ 10.235.514

Estos guarismos no estuvieron afectados por el fenómeno de la prescripción en tanto la definición del derecho pensional se efectuó por acto administrativo del 08 de junio de 2020 notificado en igual fecha por correo electrónico (Pág. 13 Archivo 03), siendo promovida la demanda el 13 de enero de 2021, sin que hayan transcurrido claramente los tres años establecidos en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Respecto a la condena de los intereses moratorios, basta decir que en casos como el de autos y conforme lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de la Corte, entre otras en la sentencia SL8614-2017, los mismos no son procedentes sobre la totalidad de lo adeudado, pues el no reconocimiento de la prestación desde la data en que se está confirmando, tenía plena justificación y cabida, pues era necesario que se acudiera a la teoría jurisprudencial a fin de concretar el derecho a partir de la capacidad residual del afiliado, por lo que no es dable definir que se tratara de una ausencia de pago injustificada o arbitraria, pues la entidad acogió una de las posibilidades que en efecto se tienen enlistadas para resolver la prestación por invalidez de quienes padecen enfermedades de tipo crónico, congénito o degenerativo, a partir de la fecha en que quedó emitido el dictamen, distinto es que bajo una intelección diferente se haya determinado otra fecha de disfrute.

No obstante, si se verifica injustificable la tardanza en el pago del retroactivo que se reconoció vía Resolución SUB 170704 del 26 de julio de 2021, pues allí la entidad enmienda la data desde cuando se dio el disfrute atendiendo por demás el historial de incapacidades del afiliado, y es donde da aplicación a las mencionadas posibilidades jurisprudenciales, definiendo como adecuada la de la fecha del dictamen que corresponde al 08 de febrero de 2020, desde donde

impone el reconocimiento del retroactivo pensional, sobre el que debe cargarse la mora a título resarcitorio a partir del 21 de septiembre de 2020 - una vez transcurridos 4 meses desde la reclamación del derecho pensional- y hasta el 31 de agosto de 2021 - día anterior a la materialización del pago-, suma que asciende a \$842.643.

Fecha del cálculo	1-sep-21
Período	20219
Interés Bancario Corriente	17,19%
Tasa E.A. Moratoria	25,79
Tasa Nominual Anual	23,16%
Tasa Nominal Diaria	0,0634550%

Período		Fecha de mora	Diferencia en días	Valor cuota	Tasa diaria	Valor presente
Desde	Hasta					
8-feb-20	31-jul-20	21-sep-20	345	\$ 3.849.094	0,06345%	\$ 842.643

De manera que, la sentencia venida en apelación y consulta habrá de ser modificada en cuanto a los intereses de mora, pues los mismos proceden únicamente sobre el retroactivo ya pagado, debiendo ser confirmada en lo demás.

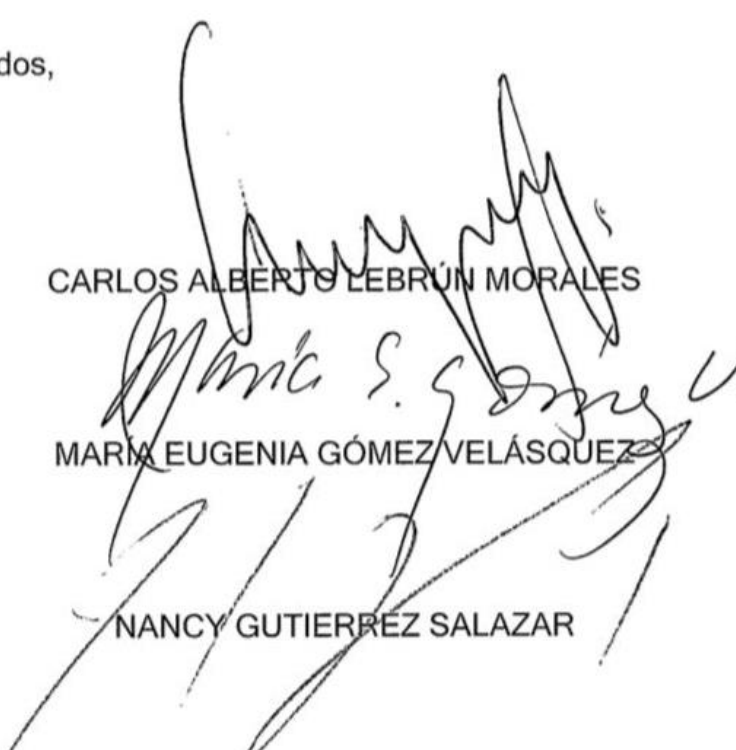
Las costas en esta instancia conforme a lo pregonado en el artículo 365 del CGP estarán a cargo de Colpensiones, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **MODIFICA** la sentencia objeto de apelación y consulta disponiendo el pago de un retroactivo pensional a cargo de Colpensiones que asciende a \$10.235.514 sin perjuicio de la compensación y los descuentos ordenados; así como el reconocimiento de los intereses moratorios solo frente al retroactivo ya pagado en virtud de la Resolución SUB170704 del 26 de julio de 2021, en la suma de \$ 842.643. **CONFIRMA** en lo demás. Las costas en esta instancia estarán a cargo de Colpensiones, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500720210000401
Proceso: Ordinario
Demandante: JOSE IGNACIO PINEDA TABORDA
Demandado: COLPENSIONES
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 14/12/2022
Decisión: CONFIRMA Y MODIFICA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 15/12/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario